



**SEÑALAMIENTO DE IMPEDIMENTO
A LA POSTULACIÓN DE
GUSTAVO ADOLFO DUBON GALVEZ
COMO MAGISTRADO A LA
CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE IGUAL
CATEGORÍA**

**SEÑORES DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A
MAGISTRADOS A LA CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE
IGUAL CATEGORÍA PARA EL PERIODO 2019-2024**

Helen Beatriz Mack Chang, de sesenta y siete años de edad, ejecutiva, soltera, guatemalteca, de este domicilio y vecindad, me identifico con Documento Personal de Identificación con código único de identificación número 1852 72533 1101 extendido por el Registro Nacional de las Personas, comparezco en mi calidad de presidente de la junta directiva y representante legal de la FUNDACIÓN MYRNA MACK, calidad que acredito con el acta notarial de mi nombramiento, autorizada en la Ciudad de Guatemala, el 21 de febrero de 2019, nombramiento que está debidamente inscrito en el Registro de Personas Jurídicas bajo la partida 332, folio 332, del libro 59 de nombramientos del Registro de las Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación; señalo como lugar para recibir notificaciones la segunda calle quince guion quince de la zona trece de la ciudad de Guatemala. Respetuosamente comparezco ante ustedes, y al efecto

EXPONGO:

OBJETO DE MI COMPARECENCIA: Por este medio me pronuncio y objeto la postulación de GUSTAVO ADOLFO DUBON GALVEZ a magistrado de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, ya que, durante su actuación jurisdiccional, en la resolución del antejuicio identificado como 71-2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, declaró junto con otros magistrados que integraron la Corte Suprema de Justicia : "I) NO HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA en contra de FELIPE ALEJOS LORENZANA, diputado del Congreso de la República de Guatemala (...)". Afirmó el postulante objetado que, en la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público "no se acreditó fehacientemente que el número 40009116 estuviera asignado al

diputado Alejos. El postulante objetado afirma además que, según el reporte del operador telefónico, la línea 40009116 se encuentra a nombre de Luis Antonio Yaquian, de la entidad de Enlace de Asuntos Estatales. Asuntos Corporativos. El planteamiento en cuestión resulta falaz, pues, basta con leer someramente el texto del documento en el que aparece la firma de Luis Antonio Yaquian, para dejar en claro que se trata del ejecutivo de la entidad mercantil que presta servicios de telefonía, que acredita que la línea telefónica, inactiva desde 2016, ha tenido como usuario a Felipe Alejos Lorenzana. En consecuencia, "Enlace de Asuntos Estatales Asuntos Corporativos" no es una entidad, como lo argumenta el postulante DUBON GALVEZ, sino es simplemente el cargo que ocupa Luis Antonio Yaquian. Por lo indicado se sostiene que la resolución proferida obedece a argumentos falaces.

El postulante objetado insiste (página 16) que no se demostró que existiera autorización judicial para la extracción forense del número 40009116. Sin embargo, las comunicaciones corresponden al teléfono de Giovani Marroquín Navas, a quien se capturó en 2015 y se acusó dentro del caso denominado La línea. Supuestamente Marroquín promovía ante ex funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal, a cambio de un porcentaje de dinero que se esperaba obtener. Según los datos obtenidos a través de la extracción forense respectiva, la cual fue previamente autorizada por el Juzgado B de mayor riesgo, de los dispositivos electrónicos que incautaron a Marroquín tras su captura, pudo establecerse la posible participación del diputado Felipe Alejos Lorenzana en el entramado de tráfico de influencias.

En el presente caso el postulante GUSTAVO ADOLFO DUBON GALVEZ decidió actuar en abuso de autoridad, pues, a la Corte Suprema de Justicia únicamente le está atribuido establecer la existencia de indicios que hagan presumible la necesidad de formación de causa penal. En consecuencia, no debe verificar aspectos procesales que son competencia del juez o tribunal respectivo al momento de que sea sometido a su conocimiento durante el desarrollo del correspondiente proceso penal. El antejuicio no es un proceso penal, sino, más bien, una prerrogativa aneja a la función o dignidad pública que se ejerce. Además, la propia Corte Suprema de Justicia ha señalado que el contenido del informe del juez pesquisador no puede ser vinculante para la decisión que se llegue a tomar. Por estas circunstancias se considera que el objetado asumió una conducta contraria a la normatividad pertinente aplicable por lo que debe actuarse en consecuencia.

1. DE LAS CALIDADES REQUERIDAS PARA SER MAGISTRADO.

La comisión de postulación definió el perfil para optar al cargo (magistrados a la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones) que debe satisfacerse por cada uno de los postulantes dividiéndolo en: 1. Requisitos constitucionales (art. 207 de la Constitución Política de la República). 2. Requisitos éticos. 3. Requisitos académicos. 4. Requisitos profesionales. 5. Requisitos de proyección humana.

En cuanto a los requisitos éticos a evaluar, por las consideraciones que se expondrán más adelante, NO SE DEBE ATRIBUIR ESTA CALIDAD A GUSTAVO ADOLFO DUBON GALVEZ, y tomando cuenta que no se puede separar la ética de la honorabilidad, puesto que dicha calidad se tiene o no por la persona, sin que al respecto existan valoraciones intermedias, se concluye que, dados los antecedentes de la postulante, no resulta idóneo para ejercer de nuevo la magistratura en la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría.

2. ELEMENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA HONORABILIDAD

La Corte de Constitucionalidad ha elaborado un Corpus doctrinal¹ que orienta el actuar del poder público, cuando se le exija – para la elección , nominación, selección u otro procedimiento similar- valorar el aspecto reconocida honorabilidad, sobre el que la Corte se ha pronunciado con anterioridad en cuanto a considerarse éste un requerimiento comprobable mediante una serie de elementos.

La comprobación de la honorabilidad del postulante deberá hacerse a través de la verificación de la concurrencia de los siguientes elementos:

1. Acreditaciones; consistente en la presentación de documentos o certificaciones.
2. Criterios sociales; integrados por la buena conducta profesional, la estima gremial, el reconocimiento del foro público, el decoro profesional, entre otros.
- 3.Repercusiones en el actuar; que se manifiestan tanto en lo profesional, en la judicatura u otro servicio prestado desde la administración pública o en cualquier otro ramo, entendiéndose como tal no solo su ejercicio profesional, sino también las actividades personales, comerciales o de cualquier otra índole que resultaren incompatibles con el ejercicio de la función pública.
- 4.Criterios de organismos internacionales; “Que conforme los Principios Básicos Relativos a la Independencia Judicial, reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del veintiséis de agosto al seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, y 40/146 de trece de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, dicha independencia implica el reconocimiento y las garantías adecuadas para que: “Los jueces resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento

¹ Corte de Constitucionalidad, expediente de inconstitucionalidad 942-2010, sentencia de fecha 24 de agosto de 2010. La Corte también se ha pronunciado sobre la reconocida honorabilidad en los siguientes expedientes: 273-91; 205-94, 3690-2009; 1167-2014 y 4639-2014.

internacional que forma parte del bloque de constitucionalidad, garantiza la inmunidad e independencia de los jueces, así como el acceso de toda persona a un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”.

5. Legislación ordinaria; “Por su parte, el primer considerando de la Ley de la Carrera Judicial establece: “Que una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco residen en el sistema de justicia, que es uno de los servicios públicos esenciales; que su reforma y modernización debe dirigirse a impedir que éste genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción y, al mismo tiempo, se revierta la ineficacia, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y modernización”; y en ese orden de ideas, el artículo 70 de la Ley del Organismo Judicial establece como prohibiciones para los jueces y magistrados que integran dicho Organismo del Estado, el hecho de tener negocios o ejercer oficios que sean incompatibles con el decoro de su profesión”. y

6. criterios complementarios La exégesis anterior, sienta criterios para lo que en diversos ámbitos se denomina “Guía de buenas prácticas” a favor de la transparencia y con ello, ante futuros procesos de elección de diversos funcionarios públicos (no sólo por parte del Congreso de la República, sino también por Poderes del Estado o entidades gubernamentales), se cuente con criterios que orienten su actuar en el futuro, tal y como estimó la Corte de Constitucionalidad en el Expediente 2409-2009, sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve, al considerar: “debido a las especiales circunstancias que lo generaron y eventualmente podrían nuevamente acaecer, esta sentencia debe clarificar el cómo del actuar público”.

En el caso de marras, los actos realizados por GUSTAVO ADOLFO DUBON GALVEZ en conjunto con otros magistrados que integraron la Corte Suprema de Justicia en la resolución del antejuicio identificado como 71-2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, produjeron repercusiones, pues concretaron una situación de manifiesta impunidad y la imposibilidad material de que el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales del orden común, pudieran proceder en el marco de sus atribuciones a dilucidar la situación jurídica de Alejos.

Estos extremos pueden corroborarse haciendo las solicitudes correspondientes de la siguiente documentación:

1. Expediente de antejuicio interpuesto por el Ministerio Público en contra número 71-2018 de la Corte Suprema de Justicia, mismo que puede ser solicitado a la Corte Suprema de Justicia, por obrar en su poder.
2. Expediente de amparo en única instancia identificado con el número 6224-2018 que se encuentra en la Corte de Constitucionalidad, lugar donde puede ser habido o en la propia Fiscalía Especial contra la Impunidad.

3. Documento de fecha 27 de febrero de 2017 dirigido a Victor Manuel Ávila Rodríguez, auxiliar fiscal de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público, y firmado por Luis Antonio Yaquian en calidad de enlace de asuntos estatales, asuntos corporativos, copia del cual podrá ser solicitada a la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público.

3. DE LOS PRECEPTOS ETICOS APLICABLES

La presente objeción también encuentra su asidero en la actuación jurisdiccional de GUSTAVO ADOLFO DUBON GALVEZ, la cual ha conculcado los más elementales principios del debido proceso, contemplado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, valores y principios éticos, aunado a que dicho proceder entraña la violación del máximo valor que informa el trabajo jurisdiccional como lo es la consecución de la Justicia.

La Corte IDH ha opinado respecto al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el mismo reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial².

En este contexto la labor del jurista debe dirigirse a conseguir la justa, pacífica, armónica y funcional convivencia, del conglomerado social, y debe prestarse ajustado a claras normas éticas y morales, que exigen de cada juez, honor, decoro, rectitud, respeto y dignidad en todas y cada una de sus actuaciones, actitud profesional que requiere una conducta recta y ejemplar, pues debe ser un paradigma de honestidad³.

La rectitud es un valor sinónimo de la justicia, que exige del profesional el ejercicio de la igualdad, la equidad y la imparcialidad en sus labores⁴. Al confrontar el desempeño del postulante objetado en el antejuicio a Luis Felipe Alejos, con los parámetros éticos a los que se ha hecho referencia, se puede inferir que incurrió en actitudes que riñen directamente con los mismos.

A lo expuesto se puede agregar que el magistrado postulante, faltó a los preceptos incluidos en el Acuerdo 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia, Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial, en especial en lo que respecta a los artículos e incisos que a continuación se detallan:

Artículo 4. inciso d. Justicia. Dar y reconocer a cada persona lo que le corresponde o pertenece. El personal del Organismo Judicial debe: d) Impartir justicia, resolviendo con estricto apego y cumplimiento al ordenamiento jurídico y garantizar que sus decisiones

² Corte Interamericana de Derechos humanos. Opinión consultiva oc-9/87 del 6 de octubre de 1987, parr. 28.

³ Tercer considerando del Código de Ética Profesional.

⁴ Ibarra, Guadalupe. Ética y valores profesionales. Disponible en GI Rosales - Reencuentro, 2007 - redalyc.uaemex.mx, consultado el 11 de marzo de 2013.

sean justas y sustentadas en derecho. Inciso f) Ser imparciales y evitar influencias de otras personas, grupos o partidos políticos, o de ser influido por el clamor públicos, por consideraciones de popularidad o notoriedad o por motivaciones impropias. Inciso g) Exhibir una conducta neutral, evitando todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o perjuicio. **Artículo 5. Independencia.** Ejercer funciones asignadas sin intervención ajena ni influencia real o aparente de factores externos. El personal del Organismo Judicial debe: a) Garantizar a las y los ciudadanos el derecho a ser juzgados bajo parámetros establecidos en el marco de constitucionalidad y legalidad, impartiendo justicia libremente, alejado de toda motivación ajena que influya en su decisión. **Artículo 6. Integridad.** Actuar con rectitud y dignidad en todos los aspectos de la vida. El personal del Organismo Judicial debe: b) Actuar dentro de las normas de comportamiento ético para generar confianza ciudadana hacia el Organismo Judicial. **Artículo 8. Credibilidad.** Actuar en el cumplimiento de las normas y las leyes, generando confianza de las personas usuarias y de la población, en lo individual y hacia la institución. El personal del Organismo Judicial debe: b) Evitar que pueda surgir cualquier duda sobre la legitimidad de sus acciones, ingresos o su situación patrimonial. c) Comportarse de tal manera que, quien observa sensatamente, perciba un actuar legítimo, regular y correcto. **Artículo 12. Prudencia.** Considerar los efectos que pueden producir nuestros actos, conduciéndose con cautela moderación y sensatez en la toma de decisiones. El personal del Organismo Judicial debe: c) Analizar las distintas opciones que ofrece el deber ser, valorar las diferentes consecuencias que traerán aparejadas cada una de ellas y emitir juicios objetivos. **Artículo 16. Deberes.** El personal del Organismo Judicial, en el ámbito de su competencia, debe: a) Mantener y promover los estándares de conducta definidos en la presente normativa y en la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes; d) Observar las garantías constitucionales que aseguren el debido proceso. **Artículo 26.** El personal del Organismo Judicial debe comprometerse de manera expresa con la misión, visión y normas éticas que rigen a la Institución, entendiendo que su cumplimiento es obligatorio y que con ello contribuye a brindar un servicio de justicia de calidad, firmando para el efecto una carta de conocimiento y compromiso ante la Gerencia de Recursos Humanos.

Por ello lo contundente de mi afirmación de que GUSTAVO ADOLFO DUBON GALVEZ, durante su desempeño como magistrado que integró la Corte Suprema de Justicia, actuó contrario a la exigencia ética contemplada en la normatividad deontológica aplicable, asimismo, en contra de los postulados números 1, 3, 5, 6, 7 y 8 contemplados por el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Los postulados aludidos se refieren a: probidad, prudencia, independencia, veracidad, juridicidad y eficiencia. En cuanto a la probidad de la postulante, se puede sustentar que la misma se vio comprometida si se considera que el trabajo de la judicatura debe evidenciar siempre rectitud, honradez e integridad de pensamiento y acción, lo que debe manifestarse especialmente en el irrestricto respeto a las garantías constitucionales que informan el

proceso penal. Al avalar la sentencia de segundo grado referida párrafos arriba, se aleja del postulado referido. De ahí que su actuación no pueda calificarse de prudente, ni mucho menos que en su ejercicio haya tenido presente su independencia. En semejante sentido afrenta a la veracidad, puesto que con sus actos facilitó el propósito espurio de los accionantes, en menoscabo de la verdad que finalmente fue acreditada. En este orden de ideas, se sostiene que faltó a la juridicidad y a la eficiencia que deben caracterizar el desempeño de la judicatura.

Asimismo, con la actitud demostrada vulneró el precepto de imparcialidad estatuido en el artículo 30 del relacionado cuerpo deontológico.

Analizando los hechos expuestos resulta notorio que la postulante, cae dentro del denominado litigio malicioso, con lo que, en consecuencia, se aparta de los postulados éticos, contenidos en las normas deontológicas que sirven de sustento a este señalamiento de impedimento.

4. CONCLUSIONES:

Es importante tomar en cuenta que el postulante no reúne las calidades requeridas por la ley para optar al cargo de magistrado, toda vez que quedó demostrado que su desempeño profesional en el caso señalado demostró falta de independencia judicial e incluso desconocimiento de elementales principios éticos aplicables. Prueba de ello lo constituyó la resolución del antejuicio identificado como 71-2018 de fecha 21 de noviembre de 2018.

La decisión referida en la presente manifestación de impedimento, se produjo en detrimento de la justicia, por lo que cabe calificar dicha situación como una repercusión negativa que favorece la impunidad y socaba el trabajo encomendado constitucionalmente al Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia.

5. POR TANTO:

GUSTAVO ADOLFO DUBON GALVEZ, por todas las consideraciones vertidas NO ES PERSONA IDÓNEA para optar al cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría porque ha faltado a las calidades requeridas por la Constitución Política de la República de Guatemala, las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial y el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, careciendo así de idoneidad por faltas a la ética, a la Reconocida Honorabilidad y los factores académicos necesarios para el ejercicio del cargo de Magistrada.

6. FUNDAMENTO DE DERECHO:

Constitución Política de la República de Guatemala: Artículo 28. Derecho de petición (Constitución Política de la República de Guatemala). Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.

En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las

resoluciones no podrá exceder de treinta días.

En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna.

Ley de Comisiones de Postulación: Artículo 20. Publicación de nombres de aspirantes. Las Comisiones de Postulación darán a conocer los nombres de los participantes que reúnan los requisitos de Ley, por medio de una publicación que efectúen en el diario oficial y en dos de mayor circulación del país, para que cualquier persona que conozca sobre algún impedimento, lo haga saber por escrito a dicha Comisión.

En virtud de lo expuesto en el presente pronunciamiento y veto, a la Comisión de Postulación, respetuosamente,

7. SOLICITO:

1) Que se tenga por presentado mi **SEÑALAMIENTO DE IMPEDIMENTO A LA POSTULACIÓN DE GUSTAVO ADOLFO DUBON GALVEZ** para el cargo de Magistrado de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, con la finalidad de que no sea considerado dentro de la lista de nombres que se remita al Congreso de la República por haber incumplido sus deberes éticos a través de la resolución de fecha 21 de noviembre de 2018 dentro del antejuicio identificado como 71-2018; y por no cumplir con el requisito constitucional de reconocida honorabilidad.

2) Se solicite la información pertinente al presente caso de la siguiente documentación al Ministerio Público: **2.1** Expediente de antejuicio interpuesto por el Ministerio Público en contra número 71-2018 de la Corte Suprema de Justicia, mismo que puede ser solicitado a la Corte Suprema de Justicia, por obrar en su poder. **2.2** Expediente de amparo en única instancia identificado con el número 6224-2018 que se encuentra en la Corte de Constitucionalidad, lugar donde puede ser habido o en la propia Fiscalía Especial contra la Impunidad. **2.3** Documento de fecha 27 de febrero de 2017 dirigido a Victor Manuel Ávila Rodríguez, auxiliar fiscal de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público, y firmado por Luis Antonio Yaquian en calidad de enlace de asuntos estatales, asuntos corporativos, copia del cual podrá ser solicitada a la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público.

Ciudad de Guatemala, septiembre 2019.



Helen Beatriz Mack Chang
Representante Legal de Fundación Myrna Mack

**REGISTRO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTOS**

Con base al acta notarial autorizada en la ciudad de Guatemala, en fecha 21 de Febrero 2019, por el Notario JOSÉ ALBERTO BARRERA SANTOS, se inscribe en este Registro bajo la partida número 332, folio 332, del libro 59 de Nombramientos, el nombramiento de HELEN BEATRIZ MACK CHANG, como PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad FUNDACION MYRNA MACK, inscrita en el Registro Civil de la Municipalidad de Guatemala, departamento de Guatemala, bajo la partida 105, folio 357 del libro 43 de Personas Jurídicas. Plazo del Cargo: Inicia el 26/11/2018 y vence el 25/11/2021. Guatemala, 5 de Marzo 2019. Expediente Número 5121021988964. Arancel según Acuerdo Gubernativo Número 404-2011, Artículo 2: Q.75.00.

El Registro del presente documento no prejuzga sobre el contenido ni validez del mismo, ni del original que reproduce y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.



Lcda. Jennie Alejandra Yello Rosales
Registradora
Registro de las Personas Jurídicas
Ministerio de Gobernación



Registro de las Personas Jurídicas
5ª. avenida 10-53, zona 1, ciudad de Guatemala, PBX.: 2413 - 8888, exts.: 5614 y 5615
www.mingob.gob.gt/rpj

Impreso el: 07 Mar 2019 09:40:11

"FUNDACIÓN MYRNA MACK"
ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

En la ciudad de Guatemala el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas en punto, Yo, José Alberto Barrera Santos, Notario, me encuentro constituido en la segunda calle quince guion quince de la zona trece de esta ciudad, a requerimiento de la señora Helen Beatriz Mack Chang, quien manifiesta ser de sesenta y siete años de edad, soltera, guatemalteca, ejecutiva, con domicilio en el Departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) Código Único de Identificación (CUI) mil ochocientos cincuenta y dos, setenta y dos mil quinientos treinta y tres, mil ciento uno (1852 72533 1101), extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala, quien requiere mis servicios profesionales con el objeto de hacer constar su nombramiento como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", por lo que se procede de la siguiente manera: **PRIMERO:** La requirente me pone a la vista primer testimonio de la escritura pública número cincuenta y uno (51) autorizada en la ciudad de Guatemala el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y tres por la Notaria Dinora Recinos Cueto de Roche, mediante la cual se constituyó la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", la cual se encuentra inscrita en el Registro Civil del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, bajo la partida ciento cinco (105), folio trescientos cincuenta y siete (357) del libro cuarenta y tres (43) de personas jurídicas; y la cual fue modificada por las escrituras públicas: a) número noventa y nueve (99) de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y tres, autorizada en esta ciudad por la notario Dinora Recinos Cueto de Roche; b) número veinticinco (25), autorizada en esta ciudad por la notaria Gladys Annabella Morfin Mansilla el dieciséis de diciembre de dos mil ocho, que contiene la modificación de los estatutos de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK" anteriormente mencionada, de las cuales, ambos testimonios tengo a la vista; y c) Acuerdo Ministerial número mil ciento sesenta y nueve guion dos mil uno, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil uno, suscrito por el Ministro de



José Alberto Barrera Santos
Abogado y Notario

Gobernación Byron Humberto Barrientos Díaz. **SEGUNDO:** En la escritura pública número veinticinco (25) autorizada por la notaria Gladys Annabella Morfin Mansilla, citada en el punto anterior, en la cláusula SEGUNDA, los artículos vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, trigésimo segundo y trigésimo tercero de los estatutos de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", que copiados textualmente en su parte conducente dicen: "...ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva es el órgano coordinador, director y ejecutor de "FUNDACIÓN", encargado de velar por la buena conducción de la Institución. Se integra con los miembros de "LA FUNDACION", en los siguientes cargos: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, dos Vocales. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: El sistema de elección para integrar la Junta Directiva será por cargos. La votación se hará en forma nominal o como lo decida la Asamblea General Ordinaria. Resultaran electos(as) quienes obtengan el cincuenta por ciento (50%) más uno de votos. La Junta Directiva tomará posesión, a más tardar, quince días después de la fecha de su elección. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. DURACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: Los y los miembros de la junta directiva fungirán en los cargos para los que fueren electos por un periodo de tres años, siendo válida su reelección. ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Cumplir y hacer que se cumplan los presentes estatutos, las decisiones de Asamblea General y las decisiones propias de la Junta Directiva; b) Ejercer la representación legal de "LA FUNDACION" por medio de su Presidente (a), quien podrá delegar esta representación en cualquier otro miembro de la Junta Directiva para asuntos determinados; c) Acordar la concesión de beneficios, donaciones, servicios o prestaciones que constituyen los objetivos y fines de esta Fundación, a favor de las personas o grupos beneficiarios que reúnan los requisitos que se establecen en este Instrumento; d) Conocer y aprobar los planes de trabajo, labores y obras a realizar; e) Proponer las políticas y los

Notaría Pública Gladys Annabella Morfin Mansilla

Notaria Pública

25

"FUNDACIÓN MYRNA MACK"
ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

reglamentos que sean necesarios para la buena marcha de los asuntos de "LA FUNDACION"; f) Disponer la política de contrataciones, funciones y régimen del personal de "LA FUNDACION"; g) Acordar el otorgamiento de mandatos especiales y designar a quienes deban ejercerlos; h) Administrar el patrimonio de la Fundación; i) Autorizar los gastos de funcionamiento; j) Conocer el plan de trabajo, el presupuesto anual, los informes sobre las actividades realizadas y los estados financieros y contables de la entidad presentados por el Director Ejecutivo, previamente a someterlos a consideración de la Asamblea General, y una vez aprobada por esta deberá remitir copia certificada a la Procuraduría General de la Nación; k) Formalizar cuando así lo haya aprobado la Asamblea General en Representación de la Fundación las adjudicaciones, transferencias, herencias, legados y donaciones; l) Autorizar gastos presupuestarios imprevistos de los cuales se dará cuenta a la Asamblea General en su sesión más próxima; m) Designar las comisiones y asesorías que estime convenientes; n) Conocer las denuncias en contra de las y los miembros, sobre presunta comisión de faltas, para la imposición de las sanciones que correspondan; ñ) Nombrar y remover de su cargo a quien ejerza la Dirección Ejecutiva; o) Proponer a la Asamblea General el ingreso de nuevos miembros benefactores y ordinarios en los términos que se indican en el artículo sexto inciso b; y c; p) Proponer a la Asamblea General las distinciones honoríficas a personas individuales o jurídicas que así lo ameriten por sus servicios de asistencia y bienestar social; q) Disponer la organización de sucursales, agencias, delegaciones o representaciones de "LA FUNDACION"; previa aprobación de la Asamblea General; r) Las demás que le corresponda por su calidad de órgano administrativo, o por disposición de la Asamblea General. ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: FACULTADES ESPECÍFICAS DE CADA MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. I. DEL PRESIDENTE: Son atribuciones específicas del Presidente(a) de la Junta Directiva: a) Ejercer la representación legal de "LA FUNDACION", en todos los actos y contratos en que "LA FUNDACION" participe. El Presidente



José Alberto Barrera Santos
Abogado y Notario

(a) podrá delegar la representación legal en otros miembros directivos para asuntos determinados, siempre que hubiese sido facultado para ello en la Asamblea General; b) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; c) Vender, donar, comprar o disponer de cualquier otro modo de los bienes de "LA FUNDACION", previa autorización de la Asamblea General; d) Otorgar y revocar poderes con representación especial dando cuenta de ello a la Junta Directiva; e) Autorizar las órdenes de pago u otros documentos de crédito o designar por escrito a otro de los miembros para que lo haga en su defecto; f) Ejercer doble voto en caso de empate, en las sesiones de la Asamblea General y de Junta Directiva; g) Aquellas que le corresponda por la naturaleza del cargo o por disposición de la Asamblea;...". **TERCERO:** Asimismo, tengo a la vista el acta que contiene la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Socios Fundadores, Benefactores y Ordinarios de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la sede la Fundación, en la cual obra el PUNTO SÉPTIMO cuyas partes conducentes establecen: "PUNTO SÉPTIMO: Elección de Junta Directiva dos mil dieciocho - dos mil veintiuno (2018-2021). Elección de Junta Directiva dos mil dieciocho - dos mil veintiuno (2018-2021). La Señora Presidenta de la Junta Directiva: Licenciada Helen Beatriz Mack Chang, informa a los miembros de la Asamblea General Ordinaria de Socios Fundadores, Benefactores y Ordinarios de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", que el período para el cual fue electa la actual Junta Directiva vencerá el veinticinco de noviembre del dos mil dieciocho, por lo que de acuerdo a lo que dictan los artículos VIGÉSIMO TERCERO, VIGESIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO Y VIGÉSIMO OCTAVO de los Estatutos de la Fundación, debe procederse a la elección de la nueva Junta Directiva. Por lo expuesto se procede llevar a cabo el proceso de elección. Se presentan como candidatos a los diferentes cargos, los mismos miembros que actualmente los ocupan; no existiendo otros candidatos(as), se procede a la votación, quedando integrada la Junta Directiva, por

José Alberto Barrera Santos
Abogado y Notario

